

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 18
O R D I N A R I A
JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2015

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cuarenta minutos del jueves doce de febrero de dos mil quince, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número diecisiete ordinaria, celebrada el martes diez de febrero del año en curso.

Por unanimidad de diez votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el jueves doce de febrero de dos mil quince:

**II. 16/2011 y
Ac. 18/2011**

Acción de inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, demandando la invalidez de diversos preceptos de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial de la entidad el diecisiete de junio de dos mil once. En el proyecto formulado por la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 4, fracción XIV, 5, fracción VI, 10, fracción I, inciso a), 16, última parte, 94, fracción V, 95, 97, incisos a) y b), fracción V, 109, 110, 111, 118, fracción VI, VIII, IX, X, XI, XII, XVIII y XIV, 119, 120, fracción III, 121, 122, 123, 124, 125, fracciones VII y VIII, 127, fracciones II, V, VI, VII y X, 136 y 137 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal. TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 4, fracción XXVII, 24, 31, fracción V, 33, 35, fracciones III, V y último párrafo, 37, fracción II, 39, fracción III, 43, en la porción normativa que prescribe “y en su caso acreditar el cumplimiento de las medidas de tratamiento propuestas”, 65, en la porción normativa que señala “la Autoridad Ejecutora podrá suprimir el libre acceso a un derecho o prerrogativa de los sentenciados en los Centros Penitenciarios cuando su ejercicio tenga fines ilícitos”, 66, en la porción normativa que*

dice “la de modificar y neutralizar los factores que han influido en la conducta del individuo para delinquir”, 81, en la porción normativa que indica “y observación directa de su comportamiento”, 82, fracción II, 84, fracciones VI y de la fracción VIII la porción normativa que prescribe “así como los elementos internos y externos con los que cuenta para no volver a delinquir”, 85, 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal. CUARTO. Se declara fundado el único concepto de invalidez formulado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del artículo 31, fracción IX, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, por lo que se declara su invalidez.”

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas realizó la presentación del considerando cuarto, relativo a la fijación de los temas constitucionales planteados en los conceptos de invalidez formulados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal. Preciso que, en primer lugar, se estudiarían las cuestiones que subyacen en los conceptos de invalidez de la segunda Comisión nombrada, las cuales responden a tres preguntas: ¿la Constitución permite la calificación del grado de peligrosidad de una persona a la luz del principio de reinserción social?, ¿la reinserción social permite la aplicación de un tratamiento técnico para el sentenciado?, y ¿qué efectos puede tener dicho tratamiento para la obtención o no de beneficios penitenciarios? En segundo

lugar, se analizaría la cuestión planteada por la misma Comisión, que responde a la pregunta ¿la participación de la víctima en la audiencia ante el Juez de Ejecución es congruente con el principio de reinserción social? En tercer lugar, se valorarían los argumentos de dicha Comisión, en relación con las preguntas ¿cuál es la naturaleza de las medidas disciplinarias?, y ¿se requiere que sea el juez de ejecución de sanciones penales quien imponga las medidas disciplinarias al sentenciado, o es posible que la autoridad administrativa lo haga? En cuarto lugar, se observarían los planteamientos de la Comisión referida, en cuanto a la pregunta ¿la incorporación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al Comité de Visita General, previsto en la ley impugnada, supone una violación a la autonomía de dicha Comisión? Finalmente, se analizará el único concepto de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se concreta en la pregunta ¿el requisito de cubrir el costo del dispositivo de monitoreo electrónico supone una violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación de los sentenciados?

Modificó el proyecto para corregir las omisiones involuntarias en la cita de los artículos 16 y 118 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal en los considerandos décimo cuarto y décimo quinto, respectivamente.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando cuarto, relativo a la

fijación de los temas constitucionales planteados en los conceptos de invalidez formulados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas realizó la presentación del considerando quinto, relativo al estudio de los conceptos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX y X, formulados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en los que se cuestiona la validez de los artículos 4º, fracciones XIV y XXVII, 5º, fracción VI, 10, fracción I, inciso a), 24, 31, fracción V, 33, fracciones III, V y último párrafo, 35, 37, fracción II, 43, 65, 66, 81, 82, 84, fracciones VI, VII y VIII, 85, 86, 87, 88, 89, 94, fracción V, 95, 97, incisos a), b) y fracción V, 109, 110 y 111 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, en su primera cuestión, referente a la interpretación del principio de reinserción social respecto a la calificación del grado de peligrosidad de una persona.

El proyecto indica que la reforma al artículo 18 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho y que entró en vigor en

dos mil once, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social, y que, bajo ese modelo, el concepto de “peligrosidad” contemplado en la norma impugnada corresponde al paradigma del derecho penal del autor, lo que es contrario al texto constitucional, puesto que toma en cuenta las características personales del inculpado para justificar la imposición de una pena, tratándolo como reo, delincuente, desviado, enfermo y desadaptado, es decir, tiene como fundamento que el Estado se encuentra legitimado para castigar la ausencia de determinadas cualidades o virtudes en la persona, siendo que con el derecho penal únicamente se deben juzgar actos, según el artículo 14, párrafo tercero, constitucional, el cual prohíbe en los juicios del orden criminal imponer pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, aunado a los artículos 22, párrafo primero, de la Constitución Federal y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales proscriben los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Señaló que, de una lectura conforme con el respeto de los derechos humanos que ordena el artículo 18 constitucional, la reinserción supone un principio rector de las obligaciones para los tres Poderes de la Unión, aplicables, en lo consecuente, a todo tipo de sanciones y medidas penales, tanto privativas como no privativas de la libertad; así, el concepto de reinserción social, sólo se puede entender si se constriñe a su sentido normativo, esto es, la delimitación del alcance y límites de la privación o restricción coactiva de bienes jurídicos que legítimamente impone el

sistema de justicia penal y de los derechos específicos que han de satisfacerse en reclusión, no así a la recuperación terapéutica respecto de un estado mental peligroso, ello tomando en cuenta que, dada la especial vulnerabilidad en que se encuentran las personas privadas de su libertad, el sistema de ejecución penal debe satisfacer estándares específicos para disminuir los efectos negativos de la reclusión en la vida y salud de los internos, los que pueden mermar severamente su desarrollo personal, familiar y social, durante y después de la reclusión. Concluyó que el paradigma reconocido constitucionalmente es el del derecho penal del acto y no el del derecho penal del autor y, por lo tanto, calificar la peligrosidad de una persona contraviene la lógica del sistema penal y de la ejecución penal.

El señor Ministro Cossío Díaz adelantó que, no obstante que se realizó la presentación del primer tema del considerando quinto, se pronunciaría respecto de sus tres temas, por ser difícil su separación analíticamente. Se manifestó en contra, aunque con algunos puntos de coincidencia, pues si bien, respecto del primer tema, el proyecto invoca criterios del Tribunal Pleno y de la Primera Sala relativos a que el nuevo paradigma del derecho penal se decanta por sancionar actos o delitos y no a la persona, se propone un uso extensivo del concepto de derecho penal del acto, esto es, a la etapa de ejecución de sanciones, pues en ésta no se individualiza la pena, estimando que lo importante es diferenciar la naturaleza y alcance de la reinserción social como derecho constitucional cuyas

finalidades, de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución Federal, son lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, a partir del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación y el deporte, instituyéndose un sistema premial de beneficios del condenado, consistente en incentivos del comportamiento del sentenciado, lo cual tiene un sentido diferente a partir de que fue condenado pues, desde ese momento, el derecho empieza a tomar en cuenta los méritos que el legislador haya dispuesto para hacerlo o no merecedor del beneficio; así, no es un acto el que se evalúa para determinar si un condenado merece dicho beneficio o no, sino su trayectoria, orientada a las condiciones de la comisión del delito y su comportamiento penitenciario, como se advierte de la resolución al amparo directo en revisión 3980/2013, que derivó en la tesis 1a. CXCI/2014 (10a.) de rubro *“SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA. EL ARTÍCULO 89, FRACCIONES II Y III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE LA PREVÉ, NO VULNERA EL PARADIGMA DEL DERECHO PENAL DEL ACTO.”* Por esas razones, consideró que el proyecto parte de una premisa equivocada, en el sentido de que pretende trasladar el derecho penal de acto y del autor al sistema premial de beneficios dentro de la reinserción social establecida en el artículo 18, párrafo segundo, constitucional.

Se refirió a que el proyecto, en su segundo tema, señala que un tratamiento reeducativo contradice los

principios de necesidad y respeto a los derechos fundamentales, pues constituiría una práctica no justificada por el delito, máxime que la autoridad podría determinar que no se ha compurgado una pena hasta que valore que el individuo ha moldeado satisfactoriamente su personalidad para convivir en la sociedad bajo la figura de la retención, con lo cual no coincidió porque el derecho penal del autor, que adopta la peligrosidad como parámetro para individualizar la pena, no es aplicable al régimen penitenciario de ejecución de penas, además de que la norma no delega discrecionalmente a las autoridades encargadas de la vigilancia la determinación de cuándo una persona puede salir de prisión con base en el desarrollo de su personalidad, ya que el tratamiento técnico progresivo, el cual permite alcanzar un beneficio que le permita la reducción de su pena, constituye un derecho del sentenciado, por lo que el Estado tiene el imperativo de proporcionarlo, mas no de imponerlo obligatoriamente contra su voluntad; también se manifestó en contra de considerar que el expediente técnico, en su sección psicológica que incluye factores de personalidad, esté enfocado al estudio del sentenciado como un desadaptado que requiere un tratamiento para modificar su personalidad y conducta, puesto que el artículo 84, fracción VI, de la norma impugnada lo prevé como un simple elemento que compone dicho expediente.

En cuanto a los estudios psicológicos, externó preocupación en términos de la opinión de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a que los estudios de personalidad son pseudocientíficos, al basarse en el concepto subjetivo de quien valora, además de que no es efectivamente medible ni pronosticable, razón por la cual no deben ser considerados para la individualización de la pena ni para su ejecución, específicamente, para negar una excarcelación anticipada como beneficio del sistema de reinserción social. Luego, estimó que se debería considerar la posibilidad de extender la invalidez propuesta a aquellas normas cuya validez depende de las primeras directamente, es decir, del reglamento. Se pronunció en contra de declarar inválidos algunos artículos en su totalidad, sino únicamente las porciones normativas referentes a la forma de pensar y a los antecedentes psicosociales, familiares y socioeconómicos. Además, se pronunció en favor de la propuesta, respecto de los artículos 84, fracciones VI y VIII, 86 y en sentido contrario a la concerniente a los artículos 109, 110, fracciones I y II, y 111, todos de la ley combatida.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas, dado el pronunciamiento del señor Ministro Cossío Díaz, realizó la presentación del resto de temas del considerando quinto. En su segunda cuestión, referente a si el principio de reinserción social permite la aplicación de un tratamiento técnico para el sentenciado, el proyecto propone que considerar la aplicación de un tratamiento reeducativo en la ejecución de una pena para lograr la readaptación del delincuente supondría una contradicción con el modelo de derecho penal que prescribe la Constitución, pues implicaría

que en la ejecución de la pena se considerara que el sentenciado es un individuo peligroso que requiere de la intervención del Estado, lo que contradice los principios de necesidad y de respeto a los derechos fundamentales, ya que constituiría una práctica no justificada por el delito, en la inteligencia de que resultaría lesivo de la libertad del individuo y la dignidad personal de la persona privada de su libertad, al pretender su transformación coactiva, siendo entonces incompatible con el texto constitucional vigente alusivo al sistema penitenciario orientado a la readaptación del delincuente. Indicó que el principio de reinserción social radica en el conjunto de derechos y criterios de justicia penitenciaria fundados en los derechos humanos del sentenciado en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, entre otros, cuyo fundamento prestacional y no correccional es el artículo 18 constitucional, resultando que las instituciones penitenciarias deberán funcionar de tal forma que permitan garantizarle al sentenciado, y con mayor razón al procesado, la posibilidad de acceder a estos servicios de reinserción.

En su tercera cuestión, referente a qué efectos puede tener dicho tratamiento para la obtención o no de beneficios penitenciarios, el proyecto estima que el tratamiento técnico progresivo es un servicio que se presta al sentenciado con la finalidad de aminorar los efectos negativos que produce la pena y que no forman parte de la naturaleza privativa de la misma, por lo que posee la libertad de utilizar este servicio, sin que se le pueda coaccionar a ello, pues rompería la

lógica y estructura del sistema penitenciario diseñado conforme al principio de reinserción social.

Por estas tres cuestiones, indicó que se propone declarar la invalidez de los artículos 4, fracción XXVII, 39, fracción III, y 84, fracciones VI y VIII, en la porción normativa que indica “así como los elementos internos y externos con los que cuenta para no volver a delinquir”.

El señor Ministro Cossío Díaz reiteró coincidir con algunas partes del proyecto y con otras no, puesto que se aplican distintos estándares de un proceso integral, en la inteligencia de que, para dictar sentencia, no se deben apreciar las características personales, morales, sociales ni familiares de quien comete el delito, sino únicamente la conducta realizada, y que, una vez dictada la sentencia, la Constitución le prevé el derecho humano de reinserción a la sociedad, así como un sistema de beneficios, mas ello no significa que el Estado puede obligarle a someterse a un tratamiento técnico progresivo. Diferenció lo anterior de las calificaciones o determinantes psicológicas en que los dictámenes relativos indican solamente cuestiones vagas, recordando el calificativo de pseudociencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya repercusión, derivada de los elementos psicológicos y criminológicos contemplados en la norma combatida, es determinante respecto de los beneficios del sistema.

El señor Ministro Franco González Salas se separó del considerando por razones muy similares a las del señor

Ministro Cossío Díaz, ya que no se pueden transpolar los principios que rigen al proceso penal contenidos en el artículo 18 constitucional, consistentes en la obligación del Estado de garantizar que, en sus instalaciones, se procure que no vuelva a delinquir la persona, existiendo para ello parámetros para definir si está sujeta o no a los beneficios que otorga la ley y se logre su verdadera reinserción social. Indicó tener algunos matices en cuanto a los estudios técnicos para observar las condiciones del sujeto y poder valorar su reinserción social anticipada.

La señora Ministra Luna Ramos anunció que escucharía el criterio de los señores Ministros que integran la Primera Sala antes de pronunciarse, al tratarse de un tema especializado en materia penal.

El señor Ministro Pérez Dayán estimó que la invalidez propuesta impactaría en la decisión del juez de ejecución, en relación con la evaluación de la duración de la pena, su modificación y hasta su remisión, puesto que la norma combatida, en sí, no sólo no representa vulneración al principio constitucional de reinserción, sino que brinda un parámetro de evaluación de circunstancias para que el juez advierta si quien fue sentenciado puede gozar o no de los beneficios del sistema, por lo que votará en contra del proyecto, sin dejar de reconocer su estudio informado y completo.

El señor Ministro Pardo Rebolledo se manifestó en contra del proyecto, coincidiendo en la diferencia entre los

principios que procuran el respeto a los derechos humanos durante el proceso penal, hasta el dictado de la sentencia, y la compurgación de la pena impuesta. Concordó con el señor Ministro Cossío Díaz y el criterio de la Primera Sala en que para la individualización de la pena no se consideran los aspectos relacionados con la personalidad, los antecedentes familiares, el ámbito en el que se ha desarrollado y el ambiente social, entre otros, sino solamente se establece una consecuencia jurídica por la satisfacción de los requisitos previstos en un tipo penal. Indicó que la ley combatida fue expedida bajo el paradigma del nuevo texto del artículo 18, párrafo segundo, constitucional, que prevé el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, sin distinguir entre física y mental, y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad. Preciso que la Constitución establece dos fines, a saber, lograr la reinserción social y procurar que la persona no vuelva a delinquir, por lo cual el sistema penitenciario no está diseñado únicamente para hacer efectiva una sanción impuesta por un juez, siendo entonces que los estudios técnicos progresivos individuales que prevé la ley en cuestión no resultan violatorios de los derechos humanos, por el contrario, persiguen dichos fines constitucionales, luego, sería complicado excluir el diagnóstico psicológico objetivo de los internos de esos establecimientos para poder diseñar un tratamiento adecuado, sin que ello implique forzar un cambio de actitud

no natural del individuo. Refirió que, así como el proyecto cita una gran cantidad de autores reconocidos en la materia, existen muchos otros con opiniones encontradas, quienes concluyen que la reinserción social tiene que pasar por un diagnóstico y tratamiento adecuados.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena recordó que, originalmente, el artículo 18 constitucional trataba la regeneración de la persona, posteriormente, de su readaptación social, lo que implicó un estudio de la teoría de la psicología y sus tratamientos en las personas y, actualmente, de su reinserción social, tras la adopción plena de la teoría del acto. Puntualizó que, en el caso, se deben analizar los requisitos a los beneficios del sistema penitenciario, siendo que los estudios psicológicos, si bien no son coactivos, retoman la idea de la readaptación, es decir, apuntan un cambio en la forma de pensar de la persona, siendo que el Constituyente, precisamente, abandonó ese paradigma tras la reforma constitucional de dos mil ocho. Consideró que, de una lectura de sospecha al artículo 4, fracción XXVII, de la ley impugnada, pudiera derivarse un tratamiento similar al representado por la película *La naranja mecánica*, consistente en una reingeniería de la psicología del individuo. Estimó difícil aceptar un estudio de personalidad dentro de un esquema de teoría del acto y de reinserción social, por lo que concluyó, en términos similares a los del señor Ministro Cossío Díaz, en que los artículos estudiados no aprueban el escrutinio constitucional.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea coincidió, en gran parte, con el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, puesto que la reforma al artículo 18 constitucional cambió el paradigma, del derecho penal del autor, al derecho penal del acto, y de la readaptación a la reinserción, respectivamente, en el sentido de que es contradictorio un derecho penal del acto con la readaptación, por ello, concordó con el proyecto en que, si la voluntad del Constituyente fue una política pública y de derechos humanos en el fenómeno penal, el legislador no puede establecer medidas atinentes a un paradigma distinto, y si bien un beneficio puede ser sujeto a requisitos, éstos no deben ser infamantes o violatorios a los derechos humanos, como es el caso de lo previsto en los artículos en pugna, deviniendo entonces en inconstitucionales. No obstante, consideró que habría que ajustar las argumentaciones del proyecto, adelantando que resulta complicado un consenso en temas tan complejos como estos. Aclaró que su exposición no adelanta criterio respecto de ciertos estudios para efecto de lograr una mejor convivencia y seguridad en los centros penitenciarios. Advirtió que podría realizarse una interpretación conforme del expediente técnico, en la inteligencia de que procura obtener un perfil psicológico del individuo, además de que éste da su consentimiento, simplemente para que, quienes administran las prisiones, sepan la personalidad de los integrantes de los centros de reclusión, sin embargo, de no optarse por esta interpretación, preferiría una declaración de invalidez.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales decretó un receso a las trece horas y reanudó la sesión a las trece horas con veintiocho minutos.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales indicó que, ante las diversas inquietudes y reflexiones que se han manifestado, atendiendo al tiempo que resta en esta sesión, es conveniente continuar el análisis de este asunto y que continúe en lista, lo que se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

Acto continuo, levantó la sesión a las trece horas con treinta minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la sesión pública ordinaria que se celebrará el lunes dieciséis de febrero de dos mil quince, a las once horas.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.